

Valdivia, trece de septiembre del año dos mil veintidós.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparecen ante este Tribunal en causa RIT I-12-2022, **Héctor Méndez Carrasco**, Funcionario Público, cédula de identidad número 8.792.037-2: **Héctor Gutiérrez Miranda**, Funcionario Público, cédula nacional de identidad número 14.485.195-1 y **Paola Machuca Rodríguez**, Funcionaria Pública, cédula nacional de identidad número 11.766.070-2, todos directores, Presidente, Secretario y Tesorera, respectivamente, en representación de la **Asociación de Funcionarios DOH Centro Sur**, RAF 94010185, organización del giro de su denominación, todos con domicilio para estos solos efectos en calle Quineo N°588, Comuna de Valdivia, Región de Los Lagos, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1 a 6, 10 y demás aplicables de la Ley 19.296, artículos 223 del Código del Trabajo y demás normas que resulten pertinentes, interponiendo Reclamación en contra de la resolución N° 42 de fecha 11 de febrero de 2022, dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, actualmente representada por doña Camila Lorca Cisternas, con domicilio en Avenida Ramón Picarte 608 de la comuna de Valdivia, Región de Los Lagos, resolución mediante la cual, procedió a efectuar observaciones a la constitución de la Asociación de Funcionarios DOH Centro Sur que representan, las que se estiman ilegales y arbitrarias, en razón de los fundamentos de hecho y derecho que exponen.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Con fecha 29 de noviembre de 2021, ante el ministro de fe de esa misma Inspección Provincial del Trabajo, don Paulo Gutiérrez Menschel, se constituyó, conforme a derecho, la Asociación de Funcionarios de la DOH Centro Sur (en adelante la Asociación).

Con fecha 30 de noviembre de 2021, se procedió a efectuar el Depósito de los Estatutos ante esa Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia (en adelante la Inspección), dentro de plazo legal y conforme a derecho, procediéndose a registrar la organización otorgándole el Número 94010185 del Registro de Asociaciones de Funcionarios (RAF) que mantiene la Dirección del Trabajo.

Los trabajadores participantes de la asamblea, fueron en total 32 trabajadores de las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, que corresponden a la zona Centro Sur de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.

Que, para determinar el quorum para constituir dicha Asociación, se tuvo como antecedente, entre otros, el certificado emitido por el jefe de la Unidad de Gestión de Personas de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, don Phil Muñoz Nilo, quien con fecha 23 de diciembre de 2021, certificó que entre las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, había un total de 237 trabajadores a contrata y 4 de Planta, totalizando en total de 241 trabajadores en total en la



zona Centro Sur, dependientes de la Dirección de Obras Hidráulicas, del Ministerio de Obras Públicas.

Los trabajadores asociados a nuestra organización, superan con creces el 10% de los trabajadores dependientes de la Dirección de Obras Hidráulicas, de las mismas regiones mencionadas.

Con fecha 28 de enero de 2022, la Asociación de Funcionarios DOH Centro Sur, RAF 94010185, fue notificada del Certificado N° 3, por la Inspectora Provincial del Trabajo de Valdivia. En la oportunidad, según la versión de la funcionaria señalada, se procedió de hecho a extender Certificado de Caducidad de la Asociación, por no haberse, en sus dichos, procedido a conformar la organización con el “quorum legal para ello”, negándose nos incluso, el derecho a recurrir respecto a dicha observación estimada ilegal y arbitraria.

Dentro de plazo legal, la Asociación de Funcionarios de la Dirección de Obras Hidráulicas Centro Sur, procedió a interponer Recursos de Reposición Administrativo y Jerárquico dispuestos en la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en contra del Certificado N° 3 que disponía la caducidad de la Asociación, solicitando se dejara sin efecto el dictamen recurrido, declarándose legalmente constituida la organización o, en subsidio, se reconociera el plazo legal para recurrir del dictamen ante los Juzgados de Letras del Trabajo correspondientes.

Con fecha 11 de Febrero de 2022, se acogió parcialmente el recurso de reposición, dejándose sin efecto el Dictamen N° 3 que determinaba la Caducidad de la Personalidad Jurídica de la Asociación y, en su lugar se resolvió reconocer el plazo legal para recurrir ante los Tribunales de Justicia dispuestos en la ley, en contra de las observaciones planteadas por la Inspección.

Los antecedentes se elevaron ante el superior de la recurrida, la que con fecha 14 de febrero de 2022, mediante Resolución 09/2022, rechazó el recurso jerárquico respecto a haberse cumplido el quorum, pero ratificando lo obrado por la Inspección, en orden al derecho que nos asiste de recurrir de reclamación ante los tribunales.

Fundamenta jurídicamente su reclamación en lo dispuesto en los artículos 1°, 2° 13° de la ley 19.296, en lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en causas ROL Nro. 2675- 19 y Nro. 1.391-2019, las que, pronunciándose sobre la labor interpretativa de las normas legales por las Inspección del Trabajo que puede realizar en el ejercicio de sus funciones, señaló que “el poder de determinar la normativa aplicable es una cuestión de interpretación que, por una parte, es privativa de los Tribunales de Justicia, y que, en este caso, además resulta realizada erradamente por el ente fiscalizador, arrogándose una facultad que tiene vedada”.

Alega que ampliar el quorum a trabajadores que no son parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, pugna, en primer término, con la norma del artículo 1°, inciso 1° de la ley en comento e igualmente la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 19 de la Constitución Política de la República, así como en los Convenios N°s. 87 y 151 vigente en Chile, ambos de la OIT, en especial, este último, sobre protección del derecho de sindicación



y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración Pública, cuyo artículo 3 señala: “A los efectos del presente Convenio, la expresión organización de empleados públicos designa a toda organización, cualquiera que sea su composición, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los empleados públicos”.

Dicho convenio vigente en Chile, en su artículo 9, establece: “Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical, a reserva solamente de las obligaciones que se deriven de su condición y de la naturaleza de sus funciones”.

Resulta extraño, a lo menos, que la autoridad recurrida pretenda imponernos un quorum distinto a aquel que ha servido de base para constituir otras organizaciones y asociaciones, incluso del mismo MOP. Un claro ejemplo es la Asociación Nacional de Abogados del MOP, constituida en el mes de Julio de 2015, según da cuenta el Certificado 1301/201575321 de la Dirección del Trabajo, la que se constituyó con una cantidad inferior a 25 asociados, muy por debajo del 10% del total de trabajadores del MOP de la época. En este caso, la Inspección del Trabajo respectiva miró a la calidad de los funcionarios y no a la cantidad o localidad a la que pertenecían los mismos. Cita otros ejemplos.

Todavía más, de acuerdo a la misma información emanada de la página web de la Dirección del Trabajo (que acompañamos), se encuentran actualmente vigentes decenas de Asociaciones por segmento o regiones, en el mismo MOP, a nivel de todo el país, con números inferiores a los de mi representada. Cita ejemplos. Concluye que resulta de justicia y jurídicamente procedente, afirmar que es posible, por la vía de la interpretación extensiva, aplicar a la situación en estudio, las normas de los incisos 5º y final del artículo 13 de la ley 19.296, y determinar que, para los efectos del cálculo del quorum requerido por la citada disposición legal para la constitución de una asociación de funcionarios conformada por los trabajadores de las agrupaciones regionales de los trabajadores de la Dirección de Obras Hidráulicas, que represento, debe considerarse exclusivamente el universo conformado por aquellos que prestan tales servicios en el respectivo espacio regional de la DOH y no del total del ministerio, como abusivamente se ha pretendido.

POR TANTO, en virtud de lo expuesto, Tratados Internacionales vigentes en Chile ya referidos y demás pertinentes, normas constitucionales y legales citadas, en especial los artículo 1 a 6, 10, 13 y demás aplicables de la Ley 19.296, 223 y demás pertinentes del Código del Trabajo y los Principios Generales del Derecho atinentes al caso, solicita wque en definitiva se de lugar al reclamo interpuesto en todas sus partes, declarando que se rechazan las observaciones alegadas y se entiende legalmente constituida la Asociación, con costas, o resuelva lo que estime más ajustado a derecho, teniendo presente el principio de libertad de asociación y sindicalización, con costas, en caso de oposición.

SEGUNDO: En la audiencia de estilo el Tribunal llamó a las partes a una conciliación sin resultados positivos, dada la negativa de la demandada, por carecer de facultades para



conciliar y acto seguido, la demandada contesta la demanda. Posteriormente, se recibió la causa a prueba fijándose los hechos a probar, las partes ofrecen, incorporan y observan sus pruebas, todo lo cual consta en el registro oficial de audio del Tribunal.

En síntesis, la Inspección del Trabajo de Valdivia, al contestar la demanda, alega que, en el marco de las atribuciones legales la Inspección del Trabajo de Valdivia, contenidas en el artículo 10 inciso 3 de la ley 19.296, que imponen a este Servicio la facultad de formular observaciones a la constitución de la asociación si faltare algún requisito para constituir la o si los estatutos no se ajustaren a lo prescrito por esta ley, se procedió a la revisión de los requisitos de constitución de la asociación señalada, observándose que la asociación no cumple con el quorum de constitución ya que de acuerdo a la información proporcionada por el MOP en su página web, la dotación nacional de dicha entidad, entre funcionarios de planta y a contrata, corresponde a 7.831 a noviembre 2021, y de conformidad al artículo 13 de la citada ley se requiere, para efectos de constituir la asociación el concurso de 250 o más funcionarios de plantas y a contrata, cualquiera sea el porcentaje que representen, determinándose que ello no ocurre en la especie, ya que participaron únicamente 40 funcionarios de distintas regiones del país (16 en Los Ríos, 3 en Aysén, 3 en Araucanía, 3 en Magallanes, 13 en Maule y 2 en O'Higgins). De esta forma se observó la constitución de la Asociación de Funcionarios, por no haberse reunido el quórum legal para ello, procediendo en consecuencia a declararse la caducidad de la misma.

Alega que la Asociación se constituyó involucrando a 6 regiones, Los Ríos, Maule, Aysén, Magallanes, La Araucanía y O'Higgins esto es, con una base interregional, ya que contempla funcionarios de distintas regiones situación que no se encuentra contemplada en los artículos 2°, 13 y 14 de la Ley N°19.296 y al involucrar a más de una región, tiene el carácter de asociación nacional, debiendo cumplir el quorum de constitución en dispuesto en el artículo 13 incisos 1° a 3° de dicha ley, sobre el total de la dotación de funcionarios planta y contrata de la repartición o servicio.

TERCERO: EL DERECHO: El artículo 13 de la Ley 19.296 dispone: *“Para constituir una asociación, en una repartición, servicio o establecimiento de salud que tenga más de cincuenta funcionarios, se requerirá de un mínimo de veinticinco trabajadores, que representen, a lo menos, el diez por ciento del total de los que allí presten servicios.*

Si hubiere cincuenta o menos funcionarios, podrán constituir una asociación ocho de ellos, siempre que representen más del cincuenta por ciento del total de los mismos. No obstante, cualquiera que sea el porcentaje que representen, podrán constituir una asociación doscientos cincuenta o más funcionarios de una misma repartición, servicio o establecimiento de salud.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores se considerará que integran el personal de la respectiva repartición los funcionarios de planta y los a contrata. No obstante, para aplicar las reglas señaladas en los incisos precedentes al personal no docente que se



desempeña en los establecimientos educacionales dependientes de los departamentos de administración educacional de las municipalidades, cualquiera sea su denominación, los quórum a que hace referencia este artículo se calcularán, exclusivamente, en relación con los trabajadores que tengan tal calidad en cada municipio

Con todo, los quórum a que se refiere este artículo, tratándose de funcionarios de planta y a contrata de las municipalidades, del personal que se desempeña en los servicios de salud administrados directamente por aquéllas, y del personal docente dependiente de la misma administración, se calcularán en cada municipio por separado en relación con los trabajadores de cada estamento.

La constitución y la elección del directorio deberán realizarse en un solo acto. En aquellos servicios o reparticiones en que, por su naturaleza no fuere posible proceder de esa forma, se estará a las normas que determine la Dirección del Trabajo. En todo caso, los escrutinios se realizarán simultáneamente.”

CUARTO: Por su parte, en el mismo sentido, la Ley N° 19.296 en su artículo 1° dispone que: “Reconócese, a los trabajadores de la Administración del Estado, incluidas las municipalidades y del Congreso Nacional, el derecho de constituir, sin autorización previa, las asociaciones de funcionarios que estimen conveniente, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas.

Asimismo, les será aplicable esta ley a los miembros del Poder Judicial actualmente en ejercicio o jubilados, sin perjuicio de las excepciones que se señalan.

Esta ley no se aplicará, sin embargo, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a los funcionarios de las empresas del Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el Gobierno a través de éste, ni a los trabajadores de las empresas del Estado que, de acuerdo con la ley, puedan constituir sindicatos.”

Así mismo el artículo 3 del mismo cuerpo legal, dispone que: “La afiliación a una asociación de funcionarios será voluntaria, personal e indelegable.

Nadie podrá ser obligado a afiliarse a una organización de funcionarios para desempeñar un empleo o desarrollar una actividad. Tampoco podrá impedirse su desafiliación.

Ningún funcionario podrá pertenecer a más de una asociación, simultáneamente, en razón de un mismo empleo. Las asociaciones de funcionarios no podrán pertenecer a más de una asociación en el ámbito regional y a no más de una en el ámbito nacional de grado superior del mismo nivel.”

Finalmente, el artículo 5° dispone que “No se podrá condicionar el empleo de un trabajador a la afiliación o desafiliación a una asociación de funcionarios. Del mismo modo, se prohíbe impedir o dificultar su afiliación o perjudicarlo en cualquier forma por causa de su afiliación o de su participación en actividades de la asociación.”



QUINTO: Así mismo, para una adecuada resolución de la cuestión sometida al conocimiento del tribunal, debe considerarse el artículo 19 N°19 de la Constitución Política de la República, que reconoce el derecho de todas las personas a sindicarse en los casos y forma que señale la ley, reconociéndose en tal norma el Principio de la Libertad Sindical como una facultad o prerrogativa de todo trabajador de afiliarse voluntariamente a la organización sindical que elija libremente, a permanecer en ella y a desafiliarse cuando lo decida sin restricciones ni prohibiciones de ninguna especie, salvo aquellas derivadas de sus estatutos.

SEXTO: Por su parte, la Libertad Sindical también se encuentra reconocida además a nivel legal en el artículo 214 del Código del Trabajo, norma que contempla no sólo el carácter voluntario, personal e indelegable de la afiliación a un sindicato, sino que también, la prohibición de establecer límites y restricciones para concretar la desafiliación de un trabajador a una determinada organización sindical.

SEPTIMO: Completa el panorama normativo los diversos tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes que reconocen la referida “Libertad Sindical” como un Derecho Fundamental. En efecto, los convenios de la OIT N° 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación y N° 98 sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, se encuentran ratificados por Chile y, en consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política de la República, es deber de los órganos del Estado, el respetar y promover tales derechos garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Del mismo modo, los derechos sindicales se consagran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23 punto 4, en cuanto al derecho a fundar sindicatos y sindicarse y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que consagra en su artículo 23 el derecho a asociarse sindicalmente.

De este modo el Estado de Chile está obligado a cumplir los Convenios ratificados no pudiendo invocar disposiciones de derecho interno para justificar su incumplimiento de modo tal que las normas auto ejecutables de los convenios ratificados se han incorporado al derecho interno obligando a los órganos del Estado al respeto y promoción de la libertad sindical.

OCTAVO: Finalmente, debe tenerse presente que en materia de Libertad Sindical, en la labor de interpretar las normas que regulan dicha libertad, el juez debe someterse a una serie de normas y principios de interpretación aplicables a la materia. En efecto, la interpretación de las normas sobre Libertad Sindical, debe responder a una interpretación pro homine y pro libertate, con el objeto de que los sindicatos y asociaciones gremiales puedan cumplir su rol protector y contribuir al desarrollo del bien común. El principio pro homine implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de



derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. El principio pro homine, incorporado en múltiples tratados internacionales, es un criterio hermenéutico aplicable a las normas que regulan derechos fundamentales, en virtud del cual debe interpretarse siempre a favor del hombre e implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva. Tal principio tiene varias formas de aplicación. En primer lugar está aquella que opera cuando existen varias normas relativas a derechos humanos, en cuyo caso debe aplicarse aquella que contenga protecciones mejores o más favorables para el individuo; en segundo lugar, en los casos en los cuales se está en presencia de una sucesión de normas, debe entenderse que la norma posterior no deroga la anterior si esta consagra protecciones mejores o mayores que deben conservarse para las personas; y en tercer lugar, cuando se trate de la aplicación de una sola norma, debe siempre interpretarse en la forma que mejor tutele a la persona.

El principio in dubio pro libertate alude a la presunción general de la libertad del ciudadano (propia de todo Estado de Derecho), e implica que no sólo en supuestos dudosos deberá optarse por la interpretación que mejor proteja los derechos fundamentales, sino que también concibe el proceso hermenéutico constitucional como una labor que debe tender a maximizar y optimizar la fuerza expansiva y la eficacia de los derechos fundamentales en su conjunto. El principio pro libertate implica que los derechos fundamentales deben interpretarse del modo más amplio posible, es decir, debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca la libertad y restrictivamente todo lo que la limite.

En síntesis, la interpretación de las normas sobre Libertad Sindical como Derecho Humano esencial de nivel constitucional, debe ser extensivo y de carácter teleológico por su finalidad protectora y tutelar, y una interpretación restrictiva haría inaplicable la libertad sindical y facilita el desequilibrio entre empleador y trabajador.

NOVENO: No existe controversia en cuanto a que la Dirección de Obras Hidráulicas constituye una repartición o sección del Ministerio de Obras Públicas.

Tampoco se controvierte que con fecha 29 de noviembre del año 2021 en la ciudad de Valdivia, ante la presencia de ministro de fe de la Inspección del Trabajo, se reunieron un total de 40 trabajadores de la Dirección de Obras Hidráulicas, quienes participaron en la votación de constitución de la organización denominada “Asociación de Funcionarios DOH Centro Sur”, registrándose la organización bajo el número 94010185 del Registro de Funcionarios de la Dirección del Trabajo, aprobando sus estatutos con un quorum de 32 votos.

Finalmente tampoco es controvertido que el jefe de la Unidad de Gestión de Personas de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, don Phil Muñoz Nilo, con fecha 23 de diciembre de 2021, certificó que entre las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, había un total de 237 trabajadores a contrata y 4 de Planta, totalizando en total de 241 trabajadores en total en la



zona Centro Sur, dependientes de la Dirección de Obras Hidráulicas, del Ministerio de Obras Públicas.

Que, la controversia se centra en determinar si en la constitución de la Asociación de Funcionarios de la Dirección de Obras Hidráulicas Centro Sur, se cumple o no con el quorum señalado en el artículo 13 de la Ley N° 19.296, ya que la Inspección del Trabajo alega la asociación no cumple con el quorum de constitución toda vez que para tales efectos debió considerarse el total de los trabajadores del MOP a nivel nacional, que corresponde a 7.831 a noviembre 2021 según se desprende de la página web del MOP, conforme a lo cual el quorum mínimo debió haber sido 250 trabajadores, razón por la cual le caduca la personalidad jurídica a dicha Asociación.

DECIMO: Habiéndose expuesto el marco jurídico normativo aplicable al caso que nos convoca y constatado que no hay controversia en cuanto a los hechos en los términos que se ha expuesto en el considerando anterior, sólo queda acoger la reclamación deducida en contra de la resolución de la Inspección Provincial del Trabajo que determinó caducar la personalidad jurídica de la Asociación de Funcionarios de la Dirección Obras Hidráulicas Centro Sur, toda vez que a la luz de dichas las consideraciones jurídicas y fácticas, es posible tener por acreditado que la citada asociación se cumplió con los quórum de constitución por las razones que paso a exponer.

En primer lugar porque el artículo 13 inciso primero de la Ley N° 19.296 indica que para constituir una asociación en una repartición, servicio o establecimiento de salud, que tenga más de 50 funcionarios, se requerirá un mínimo de 25 trabajadores que representen a lo menos el 10% del total de los que allí prestan servicios, norma que se cumple toda vez que según se ha expuesto, a la asamblea de constitución de la citada Asociación, concurrieron 40 trabajadores que se desempeñan en la Dirección de Obras Hidráulicas correspondientes a la zona Centro Sur del Mop, es decir de las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, repartición que según certificado del Mop acompañado, tiene un total de 237 trabajadores a contrata y 4 de planta, totalizando en total de 241 trabajadores en total en la zona Centro Sur. El 10% de 241 trabajadores son 24 trabajadores, y habiendo concurrido a la votación 40 de ellos se cumple con creces el plazo legal.

El hecho de que el artículo segundo indique que estas asociaciones tendrán carácter nacional, regional, provincial, comunal o local según fuere la estructura jurídica del servicio, repartición, institución o ministerio, en nada modifica lo concluido ya que una repartición de un servicio no necesariamente tendrá correspondencia con las divisiones territoriales expuestas. Por ejemplo, perfectamente puede existir una repartición que geográficamente abarque 2 regiones del país según las funciones y servicios que preste, sin que existan razones que autoricen para impedir que dicha repartición pueda constituir una asociación de funcionarios, cabría preguntarse en dicha situación porqué a una repartición que se distribuya geográficamente en



una sola región corresponde autorizarla y a una que se distribuye en 2 regiones hay que negarle la autorización para constituirse. A simple vista se aprecia como una discriminación que atentan contra de la libertad sindical constitucionalmente protegida.

En segundo lugar, porque tal como se ha argumentado anteriormente, el artículo 13 de la ley 19.296 debe ser interpretado extensivamente, en aplicación de los principios pro homine y pro libertate, toda vez que dicha norma se refiere nada menos que a uno de los atributos más importantes de la Libertad Sindical, esto es, a la Libertad de Constitución, que forma parte de la libertad individual positiva y consiste en la facultad de los trabajadores y empleadores de constituir organizaciones sindicales que más le convenga y al respecto, la legislación no sólo no debe hacer distinciones ni discriminaciones de ninguna especie en cuanto a la posibilidad de constituir sindicatos, sino que tampoco puede exigir autorización previa para constituirlos. El tipo de organización debe ser libremente determinado por los constituyentes de la misma.

En tercer lugar, porque el criterio de la Inspección del Trabajo en cuanto a que “como la ley no consagra las asociaciones interregionales expresamente, no puede autorizarse su constitución”, es un criterio restrictivo, que atendidas las normas y principios expuestos no está permitido porque atenta directamente en contra de la Libertad de Constitución, al impedir la formación de la Asociación Gremial.

Finalmente la Inspección del Trabajo, que considera a la Asociación de Funcionarios de la DOH Centro Sur, una asociación nacional, no le exige el quorum del total de los funcionarios de la DOH a nivel nacional, sino que el total de los funcionarios del MOP, lo que no sólo no tiene explicación, considerando que las reparticiones, conforme a las normas citadas, pueden constituir Asociaciones de Funcionarios, sino que además atenta en contra de la Libertad Sindical en los términos expuestos y en la práctica priva a los funcionarios de la DOH de la libertad de asociación, consagrada en el artículo 19 N° 15 de nuestra Carta Fundamental y regulado en la Ley 19.296, situación que el derecho no puede amparar.

UNDECIMO: Que toda la prueba que se ha rendido en la audiencia de juicio ha sido valorada conforme a las normas de la sana crítica, que importa tener en consideración las razones jurídicas, asociadas a las simplemente lógicas, científicas, técnicas y de experiencia, y ha sido detallada y analizada en los considerandos pertinentes, sin que existan más probanzas que analizar, y aquella que no ha servido de base al fallo, igualmente ha sido valorada en los términos detallados y consta grabada en el registro oficial de audio de este Tribunal, y en nada altera lo resuelto precedentemente por haberme formado convicción en los términos detallados en los considerandos anteriores en base a los fundamentos fácticos y jurídicos referidos.

Que por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 425 y siguientes, 432 y siguientes, 446 y siguientes, 496 y siguientes del Código del Trabajo, Ley 19.296, y artículo 19 de la Constitución Política de la República, y demás normas citadas, se resuelve:



I.- Que se acoge en todas sus partes la reclamación deducida declarando en definitiva que se deja sin efecto la observación y se tiene por constituido la Asociación de Funcionarios de la DOH Centro Sur.

II.- Que no se condenará en costas a la demandada por haber existido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RIT I-12-2022

RUC: 22-4-0393257-8

Dictada por doña **Inge Karen Müller Méndez**, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia.



WEFSXBJFWCJ

A contar del 11 de septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>